



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

CUARTA SALA ORDINARIA

PONENCIA DIEZ

JUICIO NÚMERO: TJ/IV-58310/2022 (VÍA SUMARIA)

ACTOR: Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

AUTORIDAD DEMANDADA:

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y;
TESORERO
AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADO PONENTE:

DOCTOR JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MALDONADO

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LICENCIADA REBECA CRUZ ROJAS

SENTENCIA

Ciudad de México, a **VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- VISTOS** para resolver en definitiva los presentes autos y cerrada la instrucción del presente juicio, con fundamento en los artículos 97, 98 y 150 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; así como en los artículos 25 fracción II, 27 párrafo tercero y 32, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México e Instructor en el presente juicio, **DOCTOR JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MALDONADO**, ante la presencia del Secretario de Acuerdos **Licenciada Rebeca Cruz Rojas**, quien da fe; resuelve el presente asunto conforme los siguientes puntos considerativos y resolutivos:

RESULTANDOS

1.- Por escrito que ingresó en la Oficialía de Partes de este Tribunal el **veintitrés de agosto de dos mil veintidós** Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX por propio derecho, entabló demanda en contra del **SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TESORERO, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, e impugnó lo siguiente (foja dos reversos de autos):

Las infracciones y multas, contenidas en los Formatos múltiples de pago a la Tesorería, con números de infracción: Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

as que desconozco, así como el procedimiento para sancionarme; pero tuve que pagar las multas por la cantidad de Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Del acto impugnado, se pretende la nulidad con todas sus consecuencias legales, apoyando su demanda en hechos y conceptos de nulidad, así como en pruebas debidamente admitidas.

77

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CUARTA SALA ORDINARIA

TJ/IV-58310/2022
A-012104-2023

2.- Por auto de **veinticuatro de agosto de dos mil veintidós**, se admitió a trámite la demanda, y se ordenó **emplazar a juicio a las autoridades demandadas** para que emitieran su **contestación**; carga procesal que cumplieron en tiempo y forma, mediante oficios que ingresaron en la Oficialía de Partes de este Tribunal los días **diecinueve y veinte de septiembre de dos mil veintidós**, tal y como consta del sello de recepción de los mismos, por lo que con copia de los mismos, se le corrió traslado a la parte actora para que formulara su escrito de ampliación de demanda.

3.- Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós la parte actora ingresó en la Oficialía de Partes de este Tribunal su escrito de ampliación de demanda, por lo que con copia del mismo se le corrió traslado a la autoridad demandada para que formulara su oficio de contestación a la ampliación de demanda, carga procesal que cumplió en tiempo y forma.

4.- Con fecha **veintiocho de noviembre de dos mil veintidós**, se ordenó dar vista a las partes para que en el plazo de cinco días hábiles formularan alegatos, por lo que una vez transcurrido dicho término quedó cerrada la instrucción; procediéndose a emitir la sentencia correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes, misma que se emite en este acto.

CONSIDERANDO

I.- Este Tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 31, 27, 32 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y 98 y demás relativos aplicables de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

II. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA PLANTEADAS POR LA PARTE DEMANDADA.

El **SUBPROCURADOR DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, quien actúa en representación del TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, autoridad demandada en el presente juicio, señala que se debe sobreseer el presente juicio al actualizarse el supuesto contemplado en el artículo **92 fracción IX** de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, argumentando que en el caso en concreto, **la autoridad demandada no ha emitido mandamientos o actos tendentes a hacer efectiva la multa impugnada.**

Esta Juzgadora considera que es **INFUNDADA** la causal hecha valer por la representante de la autoridad fiscal demandada, toda vez que del análisis practicado al acto





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

impugnado; esto es, a **las Boletas de Sanción**, se aprecia que **las mismas fueron pagadas**, por la cantidad total de Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

(Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX), como consta en el recibo de pago, por lo que es claro que el **TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, se constituyó como autoridad ejecutora de la resolución sujeta a debate y, en consecuencia, no es posible decretar el sobreseimiento del mismo, ya que **fue dicha autoridad la que recibió el pago** que el accionante estaba obligado a hacer con motivo de las infracciones impugnada en el presente asunto.

Como segunda causal de sobreseimiento, la misma demandada a través de su representante, señala que se debe sobreseer el presente juicio al actualizarse el supuesto contemplado en el artículo **92 fracción VII** de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, argumentando que los formatos universales de la Tesorería, **no son resoluciones definitivas**, sino que son documentos que consiguen el particular para hacer un pago de manera voluntaria.

A juicio de esta Juzgadora, la causal en estudio resulta **INFUNDADA**, ya que la Boleta de Sanción en cuestión, **impone a la hoy actora la obligación de pagar una multa**, por equivalente total de Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

el **importe que fue enterado** a la Tesorería de la Ciudad de México, a través de los **RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS** favor de la Tesorería, que **amparan los pagos por conceptos de multas**; por lo que sí es procedente la demanda de nulidad de conformidad con el artículo 3 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, en consecuencia, **no es posible decretar el sobreseimiento** respecto de las Boletas de Sanción impugnadas, o bien, respecto de los recibos de pago a la Tesorería, porque **el accionante acreditó haber enterado a la autoridad ejecutora**, la cantidad derivada del pago de las Boletas de Sanción impugnadas.

El **APODERADO GENERAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, quien actúa en representación del SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, autoridad demandada en el presente juicio, señala en su **PRIMER** causal de sobreseimiento, a través de su apoderado legal, que se debe sobreseer el presente juicio toda vez que la parte actora manifiesta haberse hecho sabedor de los actos el cinco de agosto de dos mil veintidós por lo que presentó su demanda de manera extemporánea.

Causal en estudio que esta Juzgadora estima infundada, pues si bien es cierto que la parte actora en su capítulo de "hechos" identificado con el numeral "2" manifiesta que

ANEXO
JUSTICIA
NA DE LA
MÉXICO
ORDINARIA
CIA 10

TJUV-58310/2022



A-012104-2023

realizó el pago de las multas impugnadas, lo cierto es que a la fecha de presentación de su escrito inicial, se encontraba en tiempo y forma para impugnar dichos actos, pues del propio artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece lo siguiente:

“Artículo 56. El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución.”

Del artículo anteriormente transcrito se desprende que la parte actora cuenta con un término de quince días para poder impugnar el acto de autoridad, esto a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, sin que en el presente caso sea necesaria una notificación, toda vez que el computo de los días se realiza al día hábil siguiente que se hizo sabedor de las multas impugnadas, por lo que la parte actora contaba con los días ocho, nueve, diez, once, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de agosto de dos mil veintidós, mismo que en la especie aconteció pues la parte actora ingresó su escrito inicial con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

Como segunda causal de improcedencia que hace valer la autoridad demandada, esta aduce sustancialmente que se debe sobreseer el presente juicio toda vez que, la parte actora no acredita con documento alguno su interés legítimo para poder ser parte dentro del juicio.

A juicio de esta Juzgadora, la causal en estudio resulta **infundada**, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que el acto impugnado contiene el mismo número de placas que contiene el original de la carta factura número 10855 exhibida por la parte actora, misma que se encuentra a nombre de Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX, por lo que, adminiculadas con el acto impugnado, es evidente que la parte actora acredita su interés legítimo. Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada cuyo título, subtítulo y contenido se transcribe a continuación:

Época: Novena Época

Registro: 200696

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Tomo II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a. CI/95, Página: 311

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCIÓN.

Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador.

Toda vez que la autoridad demandada no hace valer alguna otra causal de improcedencia y esta Juzgadora no estima que deba estudiarse alguna de oficio, se procede al estudio del fondo del mismo.

III.- FIJACIÓN DE LA LITIS PLANTEADA. OBJETO DE ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA.

La controversia en el presente asunto se constriñe en resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto de autoridad que ha quedado debidamente descrito en el Resultando 1 del presente fallo, a través del análisis integral de la demanda de nulidad, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte actora al promover el presente juicio de nulidad. Sustenta lo anterior, la siguiente Jurisprudencia de rubro y texto:

Época: Tercera

Instancia: Sala Superior, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

Tesis: S.S./J. 56

DEMANDA DE NULIDAD. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE EN FORMA INTEGRAL.- Tomando en consideración que la demanda de nulidad es un todo, su estudio debe realizarse en forma integral y de manera homogénea, tomando en cuenta todas y cada una de las argumentaciones que exprese la parte actora, sin que la Sala juzgadora deba analizar de manera aislada cada uno de los capítulos que la conforman; de ahí que si en el capítulo de "Actos Impugnados", se hace referencia al o los actos que se combaten, pero en el capítulo de "Causas de Nulidad" se impugnan otros, éstos también deben considerarse como actos reclamados, sin que resulte trascendente que no se hayan incluido en el capítulo señalado en primer término; asimismo, deberán tenerse como conceptos de nulidad todos los razonamientos tendientes a demostrar la ilegalidad del o los actos combatidos, aunque no se hayan hecho valer en el capítulo correspondiente, sino en uno distinto, ya que de otro modo se estaría violando en perjuicio del promovente el principio de exhaustividad de las sentencias, y por ende, las garantías de audiencia y legalidad que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Así, de la lectura integral de la demanda y de las constancias de autos, se advierte que el acto real y efectivamente impugnado en este juicio de nulidad, consiste en las **boletas de infracción** precisada en el resultando número uno del escrito inicial.

IV. CERTEZA DEL ACTO IMPUGNADO.

Por técnica jurídica procede el estudio de la **existencia o inexistencia del acto impugnado**, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2º/J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época cuyo rubro dispone:

STICIA
ADE LA
MICO
BINARIA
IA 1º



ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia **haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva.** Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, **la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados** y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, **de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda.** Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, **resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente.** A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el **cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica,** como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, **procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.**



Las autoridades demandadas **reconocen la existencia del acto combatido** al producir su contestación a la demanda, por lo tanto, **se tiene por acreditada la existencia del mismo,** pues no existe la constancia que confirme lo contrario.

V. ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LAS PARTES.

Después de analizar los **argumentos** expuestos por las partes en el escrito de demanda y en la contestación y, efectuada la valoración de las **pruebas ofrecidas** por las mismas (admitidas respectivamente en el auto admisorio y en el auto de contestación) otorgando pleno valor probatorio a las documentales públicas que obran en autos en



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

original o copia certificada, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 91 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, este Juzgador **se adentra al estudio integral de los conceptos de nulidad** expuestos por la actor en su escrito de demanda, así como en su ampliación de demanda.

La parte actora en su **PRIMER, SEGUNDO y TERCER** conceptos de nulidad manifiesta que las boletas controvertida resultan ilegales al carecer de la **debida fundamentación y motivación** con la que deben contar todos los actos de autoridad, esto al **no establecer de manera clara y precisa la conducta infractora**, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión del acto de autoridad, contravirtiendo así lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

Por su parte, **la autoridad demandada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana**, al momento de formular su contestación a la demanda, argumentó al respecto, que el acto de autoridad controvertido **reúne los requisitos de fundamentación y motivación** puesto que en él se señalan puntualmente los hechos, tiempo, lugar y forma en que sucedió la conducta infractora, ajustándose cabalmente a lo establecido en los preceptos del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal.

Una vez precisado lo anterior, este Juzgador estima necesario establecer que de conformidad a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe de constar por escrito, así como ser emitido por la autoridad competente para ello, de manera fundada y motivada, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento.

Se afirma lo anterior, ya que al efecto el artículo 16 constitucional establece en su primera parte:

*"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de **mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento**".*

Mientras que el diverso 14, preceptúa en su segundo párrafo, la prerrogativa siguiente:

*"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en **que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento** y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".*

Consecuentemente, haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos,

OFICINA
DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

TJUN-583 10/2022
A-012/04-2023



en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente para ello, de manera fundada y motivada, cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica.

Lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, así como también los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya su emisión.

Pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir dicho acto, el carácter con que lo emite, al igual que las causas mediatas y razones especiales que la responsable consideró que eran aplicables a la situación de hecho que colocan al gobernado en la adecuación de la hipótesis jurídica de hacerle exigible una multa.

Lo anterior, para que, en su caso, éste se encuentre en aptitud de alegar además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, así como el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la ley fundamental.

Al efecto, en la Boleta de sanción, el Agente de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, si bien es cierto indica en la boleta impugnada que suscribe, el día y calle donde supuestamente se cometió la infracción, también lo es que al pretender hacer una descripción de los hechos que generaron la violación al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, la mencionada autoridad únicamente señaló en el espacio correspondiente de la boleta de Sanción, lo siguiente:

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 95KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 97KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 87KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 88KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 89KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 100KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 89KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 108KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 87KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 90KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

"CIRCULAR POR DICHA VÍA A UNA VELOCIDAD DE 86KM/HR siendo que EL LIMITE PERMITIDO PARA ESA VIALIDAD ES DE 80KM/HR".

Omitiendo así, establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de dicho acto, como lo es la forma en que llegó a la conclusión que el conductor sancionado con su actuar actualizó las hipótesis contempladas en el precepto que cita como vulnerado, así como la forma en que determinó que sucedió tal conducta; además de que fundamenta dicha infracción en los artículos 9, fracción II y 33, fracción II, inciso A), del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, mismo que señala:

"Artículo 9.- Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad se establecerán de acuerdo a lo siguiente: (...)

I. En las vías rápidas de acceso controlados la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora

II. En vías primarias la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora;
(...)

Apreciándose de lo anterior, que la fracción I y II, del artículo 9 del ordenamiento antes citado, se refiere a que los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial, a falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad en vías primarias será de cincuenta kilómetros por hora, mientras que en las vías rápidas de acceso controlado será de ochenta kilómetros por hora; sin que los agentes de tránsito en comento hubiera señalado en la resolución combatida como se acreditó que el hoy actor circulaba a una velocidad mayor de la permitida y la forma en que se cercioró de tal situación.

JUSTITIA
IVADE LA
MEXICO
AOBENARIA
NCIAL



Siendo así, que para cumplir con dicha prerrogativa, no basta que la autoridad intente precisar la conducta que se le reprocha al gobernado, sino que además, se requiere que ésta precise las circunstancias especiales y razones particulares que la rodearon, pues sólo así se estará en posibilidad de tener plena certeza de que el acto de autoridad no resulta arbitrario o desproporcionado, pues en el caso como el que nos atañe, resulta necesario el conocer con toda claridad las circunstancias previas al actuar que se estima contrario a la norma administrativa, habida cuenta de que en el mundo fáctico se pudieron suscitar cualquier tipo de elementos o circunstancias ajenas al particular, que bien pudieren en algún momento fungir como eximentes, por tanto, al no poder desprenderse los mismos de la imagen que se inserta en el acto de molestia, el agente emisor tenía la obligación de haber asentado en él dichas precisiones.

Consecuentemente, resulta evidente para ésta Juzgadora que la boleta de sanción impugnada no cubre todos y cada uno de los requisitos de debida motivación que todo acto de autoridad debe contener, lo cual deja en estado de indefensión al gobernado ante la falta de cumplimiento de uno de los elementos de legalidad conforme a los requisitos que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales.

Esto partiendo de los principios Constitucionales de que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación, el que un acto de autoridad debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad que existe en una ley; y por motivación, el señalar con precisión las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, haciendo ver que dichos actos no sean caprichosos ni arbitrarios, a efecto de que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en la especie no se actualizó

Lo cual lleva a concluir que **en la especie se está en presencia de un acto de autoridad que contraviene los requisitos de fundamentación y motivación** que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sólo puede traer como consecuencia, que se declare la nulidad del mismo, ello ante su manifiesta ilegalidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 20. J/248, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo sesenta y cuatro, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, que a la letra dice:





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
DE MÉXICO
ALA ORDINARIA
NACIONAL

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también **deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa.** Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado."

Así como también, el criterio jurisprudencial I.4o.A. J/43, correspondiente a la novena época, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página 1531, cuyo texto establece:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.

(Lo resaltado es de esta Sala)

TJUN-5931072022
SERENAK
A-0124-2023

Atento a que el argumento sujeto a estudio resultó suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, se estima por parte de ésta Juzgadora innecesario el estudio del resto de los conceptos de anulación expresados por la actora, ya que en nada variaría el resultado del presente fallo, tal y como lo dispone el criterio S.S./J. 13, de la tercera época, emitido por la Sala Superior de éste Tribunal, aprobada en sesión plenaria del día veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha dos de diciembre del mismo año, en cuyo contenido se establece:

“CAUSALES DE NULIDAD. SI RESULTA FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD NO ES NECESARIO EL ANÁLISIS DE TODOS LOS DEMÁS. - En los casos en que el actor haga valer varias causales de nulidad en la demanda, y al estudiarlas, la Sala del conocimiento considere que una es fundada y suficiente para declarar la nulidad de la resolución o acto impugnado, y para satisfacer la pretensión del demandante, no está obligada a analizar en el juicio las demás causales.”

En atención a lo señalado, siendo fundado el concepto de anulación planteado por el impetrante, trae como consecuencia que se declare la **NULIDAD** de las Boletas de Sanción con números de folio Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMXDato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

quedando sin efectos con todas sus consecuencias legales, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, fracción II y 102, fracción VI, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

En consecuencia, **los formatos múltiples de pago**, son fruto de un acto viciado de origen; por lo tanto, también resulta ilegal, al estar apoyado en dicha boleta, en ese sentido, debe declararse su nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Teniendo aplicación la tesis jurisprudencial sustentada por el Poder Judicial de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Tomo 121-126, Sexta Parte, página 280, que textualmente señala:

“ACTOS VICIADOS FRUTOS DE, Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”-

En consecuencia, con fundamento en el numeral 102 penúltimo párrafo, de la Ley en cita, queda obligada la autoridad demandada a restituir al actor, en el pleno goce de los





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

derechos que indebidamente le han sido conculcados, lo que se hace consistir en que la autoridad demandada de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**, realice los trámites respectivos para que se **cancele y retire del Sistema de Infracciones correspondiente, la boleta de sanción declarada nula.**

Mientras que el **TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO** deberá realizar en favor del actor la devolución de la cantidad indebidamente pagada con motivo de las boletas de sanción declaradas nulas, las cuales constituyen un monto total de Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX exigirle la realización

de ningún otro tipo de trámite administrativo.

Para efecto de dar cumplimiento a tales extremos, se les concede un término de **DIEZ DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que quede firme el presente fallo, según lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

En mérito de lo expuesto y términos de lo previsto por los artículos 1, 97, 98, 100 fracción II, 102 fracción VI inciso a) y 150 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es de resolverse y se:

RESUELVE:

PRIMERO. - Esta Ponencia es **COMPETENTE** para conocer del presente asunto, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero de este fallo.

SEGUNDO. - **NO SE SOBRESEE** el presente juicio, atento a lo expuesto en el Considerando II de esta resolución.

TERCERO. - **SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO**, en términos del Considerando Quinto de esta resolución y para los efectos indicados en la parte final del mismo Considerando.

CUARTO. - Se hace saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la presente sentencia **NO PROCEDE** el recurso de apelación, previsto en el artículo 116 de la citada ley.



QUINTO. - A efecto de garantizar debidamente el Derecho Humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante el Magistrado Ponente, para que les explique el contenido y alcances de la presente sentencia.

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. - Así lo resuelve y firma el Doctor Jorge Antonio Martínez Maldonado, Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México e Instructor en el presente juicio, ante la presencia del Licenciada Rebeca Cruz Rojas, quien da fe.

DOCTOR JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MALDONADO
Magistrado Presidente e Instructor

JAMM/RCR/jemf

LICENCIADA REBECA CRUZ ROJAS
Secretaria de Acuerdos



CUARTA SALA ORDINARIA JURISDICCIONAL
PONENCIA DIEZ
JUICIO NÚMERO: TJ/IV-58310/2022 (SUMARIO)
ACTOR: Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX Dato Personal Art. 186 LTAIPRCCDMX

CERTIFICACIÓN Y CAUSE EJECUTORIA

Ciudad de México, a veintiuno de marzo del dos mil veintitrés.- La suscrita Secretaria de Acuerdos, **Licenciada Rebeca Cruz Rojas**, con fundamento en lo previsto por el artículo 56 fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la sentencia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, fue debidamente notificada a la autoridad demanda y a la parte actora, ambas en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, sin que al día de la fecha **ninguna** de las partes haya interpuesto medio de defensa alguno.- Conste, doy fe.-----

Ciudad de México, a veintiuno de marzo del dos mil veintitrés.- **Vista** la certificación que antecede de la que se desprende que al día de la fecha no se ha interpuesto ningún medio de defensa en contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, al respecto, **SE ACUERDA:** Por la razón aludida y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se determina que la sentencia de fecha veinticuatro de enero del dos mil veintitrés **HA CAUSADO ESTADO.-** En cumplimiento a la obligación establecida por los artículos 121 fracción XXXIX y 126, Apartado Primero, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis, procédase a **cargar en el Sistema Digital de Juicios de este Tribunal (SIDIJ)**, en el estado procesal **CAUSA EJECUTORIA**, diseñado para esos efectos, **el archivo digitalizado del original con firmas autógrafas** del presente acuerdo y de la sentencia definitiva del juicio en que se actúa, debiendo informar mediante **atento oficio** a la titular de la Unidad de Transparencia de este órgano jurisdiccional, una vez que se haya efectuado lo anterior.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 17 fracción V, de la Ley de este Tribunal, **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.-** Así lo proveyó y firma el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria e Instructor en el presente juicio, **DOCTOR JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MALDONADO**, ante la Secretaria de Acuerdos, **Licenciada Rebeca Cruz Rojas**, que da fe.

JAMM/RCR/MEGR